

Capítulo 1

Tras las huellas de la intervención social contemporánea

Revisar los antecedentes de las prácticas de intervención social implica considerar el modo en que históricamente se han transformado las necesidades sociales, sus criterios de clasificación, la denominación de los necesitados y las estrategias a través de las cuales se han intentado suplir estas necesidades.

Al respecto podemos señalar cinco formas clásicas de intervención, hábilmente descritas por Robert Castel en *La Metamorfosis de la Cuestión Social* (1995): 1) las formas de sociabilidad primaria que apelaban a la solidaridad del grupo; 2) las prácticas de caridad adelantadas desde la iglesia católica; 3) las modernas ejecutadas por las instituciones municipales de beneficencia pública; 4) las concepciones y prácticas contemporáneas de filantropía; y 5) la asistencia social, que como política pública se adelanta desde el Estado, particularmente en la consolidación de su estatus como “Estado del Bienestar”, que pretende generar seguridad social extendida a todos los ciudadanos en forma de derechos sociales y públicos. Esta clasificación nos permite ubicar a las distintas prácticas de intervención que se han desarrollado en Colombia desde finales del siglo XIX e indicar algunos de sus rasgos predominantes.

En primer lugar, durante el siglo XIX⁴ y mediados del siglo XX, inicialmente en Europa, la condición de necesitado y carente se relacionó directamente con la condición de *pobre*. En particular en América Latina, hasta

⁴ Es importante señalar que la revisión de este periodo ha sido desarrollada, entre otros, por la profesora Beatriz Castro Carvajal, docente del Programa de Sociología de la Universidad del Valle. Algunos de los referentes históricos de la reflexión se encuentran en su artículo “Los inicios de la asistencia social en Colombia”, publicado en *CS*, revista en Ciencias Sociales, de la Universidad Icesi, en mayo de 2007, No. 1.

la década del cuarenta del siglo XX, la idea de pobre estaba referida a la relación entre nativos y colonizadores en el marco de los primeros procesos de industrialización. Éste es un momento en el que los procesos de intensa urbanización (motivada por los discursos de desarrollo, el refinamiento de los medios e infraestructuras de transporte, los procesos de industrialización y ciertos fenómenos de violencia rural) desembocaron también en procesos de pauperización social. Los núcleos urbanos se empezaron a asumir como escenarios contradictorios y complejos: de modernización y empobrecimiento creciente, de florecimiento educativo y marginación cultural, de enriquecimiento económico y tecnológico, pero también de moldeamiento de diferencias de clase.⁵ Como ya han señalado diversos autores, en este contexto, la clasificación de *pobre* no era ajena a la necesidad de inserción de los nativos en el desarrollo científico-tecnológico. Así, los pobres/nativos, fueron vistos como los incapaces de sumar sus fuerzas a los afanes desarrollistas y por lo tanto, como los que requerían de asistencia social.

Bajo este panorama algunas primeras instituciones, que actuaban acudiendo a diversas prácticas filantrópicas, se ocuparon del problema de la pobreza y formalizaron la condición de *asistido*, que terminaría siendo clave para la configuración de lo social en América Latina. De la misma forma, las prácticas filantrópicas y caritativas constituyeron un lugar de origen para la consolidación de las estrategias de asistencia adelantadas por el Estado benefactor (hacia las primeras décadas del siglo XX) y la profesionalización, privilegiada, de técnicas en la carrera de trabajo social⁶—que surgió como un modo de reconocer sistemáticamente la sociedad para intervenir racionalmente sobre ella.

En el caso colombiano, estas estrategias de asistencia fueron abordadas desde un escenario de tensión entre las nociones de filantropía y caridad. La filantropía era entendida como la “dedicación activa a promover la felicidad

⁵ Al respecto, Beatriz Castro sostiene que la pauperización económica sembró en la clase dirigente temores de que se presentara en América Latina un fenómeno como el de la pauperización europea y el levantamiento de la comuna de París. Ver: Castro, Beatriz (2007: 157).

⁶ Es importante recordar que hacia 1936 se funda en Colombia la primera escuela de Trabajo Social anexa a la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

y el bienestar a sus congéneres” (Castro, 2007), mientras que la caridad se consolidaba bajo un discurso con principios religiosos católicos que ubicaban la figura de Jesús como modelo de pobreza y virtud. De fondo, los principios sobre los que se erigían las prácticas de caridad justificaban las desigualdades sociales en tanto prescribían resignación y humildad a los pobres que, a cambio, gozarían de mayores posibilidades de salvación. La caridad, entendida entonces como el ejercicio de dar al que lo necesita, provee perfeccionamiento espiritual a quien da y cristianización y moralización a quien recibe.⁷ La tensión entre filantropía y caridad en el país se agudizó con los procesos de independencia de América Latina y las consecuentes rupturas entre la iglesia católica y el Estado. Por un lado, los nacientes Estados latinoamericanos pretendían conservar el control sobre la Iglesia sin garantizarle situaciones de privilegio o monopolio sobre la cuestión social, mientras la iglesia católica aspiraba a liberarse del control estatal y mantener su situación privilegiada frente a otras confesiones religiosas. Cabe destacar que la iglesia católica contaba con la experiencia pedagógica y práctica que contrastaba con la precariedad de los Estados, y que parecía otorgarle mayor legitimidad y reconocimiento en el trabajo sobre lo social. La discusión entre Estado e iglesia católica se producía en un plano en el que convergían, al menos, tres juegos de relaciones: la relación entre caridad, iglesia católica y virtud; entre beneficencia e instituciones benefactoras; entre Estado y procesos de secularización. Estos

⁷ En este sentido conviene revisar la noción de caridad que aparece en las encíclicas papales de la época. La de Juan XII de 1891 promulgaba por la justicia social en clave de caridad cristiana y definía las obligaciones que adquirirían los sujetos que se ubicaban en ambos extremos de las prácticas de caridad: los que dan y los que reciben. La encíclica *Rerum Novarum* se planteó como un discurso de la caridad que, además, reaccionaba al avance del comunismo y al temor a que éste se capitalizara en su cercanía con las necesidades de los pobres. Lo mismo ocurrió con la encíclica *Quadragesimo Anno* del papa Pío XI, que si bien reivindicaba la figura del obrero también efectuaba una fuerte defensa de la propiedad privada. Es importante anotar que ésta fue la primera encíclica en referirse a la noción de acción social, cuyo carácter era preventivo y permanente. La acción social era definida como “el influjo ejercido por una causa cualquiera. Fuera del influjo físico, hay otro moral, y es el ejercido por un ser racional en otro racional, no ya modificando el ser físico de la persona, sino infundiéndole nuevas cualidades morales, modelando por medio de la palabra el entendimiento y la voluntad ajena”. De allí se desprende la idea de “obras sociales”, con una intención precisa: “conservar al pueblo en la fe y en las sanas costumbres, y el atraer a los extraviados y viciosos al buen camino para de ese modo conservar la paz social y procurar la salvación de las almas”. Ver: Castro, Beatriz (2007: 157).

tres juegos de relaciones presentaban un escenario político que polarizaba las tendencias entre el proyecto conservador, que respaldaba las intenciones de la iglesia católica y las acciones de caridad, y el proyecto liberal, que impulsaba una mayor ruptura entre iglesia católica y el Estado.

Si bien bajo estas tensiones la iglesia católica perdió el monopolio de la administración de la caridad, continuó dominando la mayor parte de las instituciones y prácticas de asistencia. El Estado colombiano, por su parte, en particular el gobierno liberal de 1870, introdujo modalidades de caridad que se tradujeron en acciones de beneficencia al lograr sostener un sistema de atención a los pobres en manos del Estado. Por otro lado, los gobiernos liberales de finales del siglo XIX promovieron un fuerte trabajo institucional en el campo de la educación: ésta se hizo obligatoria y, a pesar de los esfuerzos estatales, continuó contando con una marcada presencia religiosa a través de organizaciones laicas que funcionaban con el soporte económico de la iglesia católica. Bajo esta lógica se dio también el apoyo en los ámbitos de la salud y la protección: las administraciones municipales y departamentales destinaron recursos para estas acciones pero la iglesia católica continuó administrando la mayor parte de los orfanatos y hospitales.

Hacia 1944, la Compañía de Jesús quedó a cargo de la coordinación de la *acción social católica* introduciendo un carácter político a su quehacer y surgieron los patronatos obreros, en respuesta fundamentalmente al crecimiento del trabajo femenino, lo que produjo una nueva dinámica en la relación entre la iglesia católica y las obreras. Los patronatos ofrecían básicamente asilo y asistencia a las trabajadoras, lo que garantizaba su “honestidad” y “virtud”.

Por su parte, el Estado colombiano fundó hacia las primeras décadas del siglo XX algunos hospitales y posibilitó la aparición de otros que, aunque privados, contaban con la ayuda estatal y eran animados por intereses públicos. Un programa importante que emerge en este periodo en el área de la salud en 1919 es el de Gota de Leche, que buscaba efectuar vigilancia médica sobre los niños de los sectores considerados como marginados a través de institutos de puericultura y de dispensarios lactantes donde se les pesaba, examinaba y se daba formación a las madres sobre las fórmulas alimenticias adecuadas para los niños. Estas iniciativas estuvieron ligadas a la aparición de políticas y

preocupaciones estatales sobre la higiene en las nacientes ciudades y los altos índices de mortalidad infantil. De esta manera surgieron los primeros hospitales infantiles, entre ellos el Club Noel de Cali en 1934.

Los procesos de consolidación del Estado impactaron durante este periodo las estrategias de asistencia: la indigencia fue prohibida y atendida desde la institucionalidad, aparecieron orfanatos estatales, se profesionalizó la asistencia social (en primer lugar desde la ciencia médica) y cobró interés el trabajo sobre la higiene y la salud pública. El país asistió entonces a la estructuración de una incipiente asistencia, por primera vez pública, secular y moderna que se distanciaba de las prácticas de beneficencia católica.

Otro aspecto clave para comprender los antecedentes que gestaron la aparición de la intervención social es el impacto de los discursos de desarrollo en las décadas del sesenta y setenta. Conocidos como el “paradigma desarrollista”, éstos pusieron su acento sobre el crecimiento económico, la modernización institucional y educativa, materializada en políticas de planificación económica y social sobre los campos de la agricultura, la salud y la educación. Un hito importante que dio paso a este paradigma se produjo entre el 11 de julio y el 5 de noviembre 1949 cuando la Misión Económica del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento visitó Colombia para formular un programa general de desarrollo en el país.

En América Latina y Colombia estos discursos del desarrollo tuvieron como referencia la relación con los Estados Unidos.⁸ En esta relación se producía la idea que los Estados Unidos tenían el derecho y la habilidad de intervenir políticamente en otros países con el objeto de impulsar su desarrollo. En este contexto aparece, por primera vez, en la región la Fundación Rockefeller con el objeto de aliviar las condiciones de subdesarrollo; se impulsaron iniciativas de industrialización y de desarrollo económico que distinguían a las masas populares como enfermos, malnutridos, incultos y fisiológicamente débiles, por lo que requerían una acción social que debía concentrarse, en principio, en el tema de la salud.

⁸ Al respecto conviene revisar con atención el movimiento que se produjo entre la política del “Gran garrote” de principios de siglo a la de “Buen vecino” en los años treinta.

La década del cincuenta, del siglo XX, constituye un momento crucial para comprender el papel que los discursos del desarrollo jugaron, como moldeadores de procesos de atención de lo social, en América Latina. El periodo comprendido entre 1950 a 1959 se puede caracterizar, de manera general, por ser un momento de crecimiento urbano, aceleración y desaceleración industrial. Frente a las medidas proteccionistas emprendidas en el marco de la II Guerra Mundial, como parte de los procesos de modernización de algunas naciones latinoamericanas, entre ellas Colombia, se dictaminan medidas proteccionistas, de control de mercados internos y de cambio monetario que orientaron el desarrollo de una *industria sustitutiva*, permitiendo el establecimiento progresivo de empresas en el país y en la ciudad, sobresaliendo las ramas de productos químicos y farmacéuticos, textiles y alimentos.

Los cambios en la estructura industrial y tecnológica, elevaron la productividad de la región vallecaucana, lo que a su vez provocó una serie de procesos de inmigración e invasión de tierras para uso residencial y expansión de la ciudad de Cali, situación que se puede traducir en la creación de barrios como El Mortiñal, Popular, Caldas, Villacolombia y Primitivo Crespo.

Las migraciones, alentadas por el crecimiento económico, se vieron además impulsadas por las condiciones de violencia partidista regional, que configuraron a la ciudad de Cali como un escenario para preservar y mejorar la calidad de vida. La expansión urbana, producto de los procesos mencionados anteriormente, fue aprovechada por agentes especuladores de la tierra que formaron invasiones y urbanizaciones ilegales sin posibilidades inmediatas de servicios públicos.

Por otro lado, desde el marco continental, a comienzos de los cincuenta ya estaba implantada la idea de tres mundos: el primero, compuesto por las naciones industrializadas libres; el segundo, conformado por las naciones comunistas industrializadas y, el tercero, por las naciones pobres no industrializadas. Esta distinción sirvió como telón de fondo a la aparición del Plan Marshall, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que promovían acciones para mitigar la pobreza y ejercer control demográfico en los países del tercer mundo.

Es importante anotar cómo estas acciones sobre el desarrollo tuvieron impacto en la configuración de carreras en ciencias sociales en América Latina. Por un lado, la confianza en la ciencia y la tecnología como pilares del desarrollo produjo un impulso a la “transferencia tecnológica”, que no siempre consideraba factores sociales y culturales para su implementación. Por otro, los problemas sociales generaron un interés sin precedentes en Latinoamérica, lo que permitió la migración de intelectuales del primer mundo que, desde las ciencias naturales y las ciencias sociales, promovieron estudios en torno a la innovación tecnológica y los problemas sociales.

En este marco, los objetos de la cuestión social se relacionaron con la idea de subdesarrollo. Así, problemas como la pobreza, el capital educativo insuficiente, las prácticas agrícolas arcaicas, las actitudes y valores culturales premodernos y los factores raciales, religiosos, geográficos o étnicos que obstaculizaban el desarrollo, se consideraron objetos de intervención. Esto permitió concebir como vulnerables o carentes a diversos sectores sociales: los iletrados, subdesarrollados, campesinos sin tierra, malnutridos, indígenas, pequeños agricultores y mujeres cabeza de familia. El discurso y las prácticas del desarrollo permitieron situar los problemas sociales en el escenario “neutral” de la ciencia y promovieron la emergencia en América Latina de trabajos de investigación. Se produce entonces un desplazamiento de las prácticas de atención a lo social, en principio inmersas en procesos de consolidación estatal, a un terreno más académico y, si se quiere, más *tecnocrático*, lo que sienta las bases para la consecuente profesionalización de las actividades de intervención.

Durante la década del sesenta es necesario considerar cómo la oposición a los discursos del desarrollo reguló cierto trabajo comunitario que, de marcado corte político, se efectuó en América Latina hasta la década del ochenta. Nos referimos, entre otras, a las prácticas de la educación popular que:

[...] surge, en principio como respuesta a esa triple problemática que plantea el desarrollo en sus primeras versiones: 1) como crítica al extensionismo rural, que propendía por un desarrollo fundado en la adopción de tecnologías agrícolas modernas, transformando las prácticas culturales indígenas y campesinas; 2) a la ‘educación

bancaria,⁹ fundada en la idea de que la educación debe depositar y transmitir valores y conocimientos, de manera unidireccional, en las cabezas vacías de los educandos (y, por lo tanto, reproduce los modos tradicionales de dominación que determina lugares sociales para los “que producen” conocimiento y lugares sociales para los “que reproducen” conocimiento); 3) y al etnocentrismo cultural que impuso la cultura occidental como el único modelo legítimo de cultura, reduciendo las diferencias culturales y la diversidad cultural a síntomas del ‘subdesarrollo’ y residuos “premodernos” (Acevedo, *et al*, 2005 : 12).

Son éstos procesos, agenciados en medio de fuertes tensiones políticas y acciones de movimientos sociales y sindicatos, que empiezan a instalarse en la escena pública con nuevas demandas. Así, en la ciudad de Cali durante este periodo se presentan muestras de oposición al régimen del general Rojas Pinilla, en contra de los métodos tayloristas de producción, cuando los trabajadores de Croydon del Pacífico terminaron en un paro cívico; la marcha de trabajadores azucareros en 1960 y las protestas frente al elevado ajuste de tarifas de servicios públicos entre 1968 y 1969, constituyen solo algunos ejemplos de la incidencia de las ideas políticas de izquierda en la región.

Por otro lado, los conflictos por la tierra y la lucha por la vivienda se acentuaron en los años sesenta. Las oleadas de inmigrantes que, en la década anterior se habían establecido en el núcleo urbano de la ciudad se lanzaron a la toma de territorios con una clara conducción política.

⁹ La educación popular supone el escenario educativo como un lugar de encuentro entre saberes desiguales que pugnan por legitimarse; de tal manera que la legitimación de los unos y la invisibilización de los otros puede denominarse, como “Educación Bancaria” o “Educación Liberadora”. La Educación Bancaria se centra en la transmisión de conocimientos, valores, habilidades y destrezas seleccionados por los expertos en educación bajo los criterios de las élites sociales. Los procesos pedagógicos de la Educación Bancaria reconocen como actor principal al maestro quien es el que sabe, el que piensa, el que habla, el que transmite –eligiendo las mejores metodologías y técnicas para lograr que sus mensajes queden bien “depositados” en las conciencias de sus alumnos– y el que evalúa y califica. La Educación Liberadora, en cambio, es aquella cuyos procesos pedagógicos se centran en las necesidades e intereses del educando en comunidad y en contexto. Al reconocer a los educandos y su cultura como el centro de la acción pedagógica, la Educación Liberadora implica modalidades pedagógicas diferentes de acuerdo con las particularidades y diversidad cultural de los sujetos. La Educación Liberadora tiene un fin central: el empoderamiento de los sectores subordinados para que colectivamente transformen las condiciones de inequidad, injusticia y violencia social.

Más tarde, en el marco Latinoamericano, al paradigma desarrollista se integró la Teoría de la Dependencia, a la que se adscriben buena parte de los discursos de la Educación Popular, que consideraba al desarrollo y al subdesarrollo como movimientos complementarios, resultados de la expansión del capitalismo y las relaciones hegemónicas de los países desarrollados en sus intercambios económicos y culturales con los países del tercer mundo.

Para el año de 1970, la población de Santiago de Cali registraba una tasa de crecimiento municipal del 3,85%, mostrando una desaceleración en el movimiento migratorio e industrial de acuerdo a la tasa registrada en 1958 de 6,13%. Fue ésta sin embargo una década clave para la urbanización de la ciudad, con la inminencia de los VI Juegos Panamericanos que significó para Cali un esfuerzo en la dotación de escenarios deportivos, infraestructura hotelera y equipamiento urbano.

Bajo las críticas propuestas a las teorías de la dependencia latinoamericana, hacia la década del ochenta se fueron configurando nuevas propuestas de desarrollo, entre las que se destaca el Desarrollo a Escala Humana, propuesto por Manfred Max Neef, Antonio Elizalde y otros. Las propuestas de desarrollo alternativo impactarían notablemente los modos en que se opera sobre y con los sectores comunitarios. Podría determinarse cómo en prácticas de intervención social contemporánea, como el empoderamiento social, se perciben rastros de las propuestas que los discursos de desarrollo alternativo hicieron en la década de los ochenta. En particular, lo que corresponde a ciertos principios que invitaban a mayores niveles de autoregulación de las comunidades y una mayor articulación entre sociedad civil y Estado a través de la participación comunitaria (Acevedo, 2005).

Posteriormente emergen –gracias al impacto de corrientes pedagógicas que privilegiaban la horizontalidad en los procesos educativos¹⁰ y, como mencionamos previamente, efectuaban críticas a la Educación Bancaria– tendencias enmarcadas en los discursos de la participación y la dialéctica. Estos discursos contenían una crítica a las orientaciones político-clasistas, en tanto consideraban que éstas reproducían las formas jerárquicas tradicionales. Esta idea alimentó

¹⁰ En este caso vale la pena anotar el importante papel que juega el trabajo de Paulo Freire y la relevancia que cobra Gramsci en el contexto latinoamericano de los años setenta.

procesos de participación y desarrollo comunitario en el marco de un Estado que no era ya visto sólo como instrumento al servicio de las élites sino, también, como una institución legítima que, para refinar sus procesos democráticos, requería de la participación de las organizaciones y movimientos civiles.

Ya hacia finales de la década del noventa, en parte ante la crisis del bloque socialista y el *desorden* ideológico que acompañó su caída, se asiste a una creciente “neutralización política”, o lo que reconoceremos luego como racionalización de las actividades de intervención. De fondo, asistimos a una creciente desconfianza en los procesos de transformación estructural y una renacida convicción en las acciones en escenarios micro, controlables y evaluables, que operan a su vez como una suerte de laboratorios de *experimentación social* de métodos de intervención.

Los movimientos sociales y las acciones políticas no escapan al impacto de la crisis de la izquierda. Estos experimentarán la emergencia de una “política menor”. Para ampliar la noción de política menor, se acude a Lazzarato (2006), quien sostiene que se pueden distinguir dos modos de realización política: una política mayor, caracterizada por su realización realista y cálculo de posibles previsible. Se trata de una política operativa, con un diseño de estrategias y énfasis en los procesos de organización burocrática formal y legal, que encara los problemas sociales mediante soluciones puntuales y que aspira a atacar las causas para superar los efectos.

Por su parte, la política menor tendría su origen, como lo mencionamos previamente, en la crisis experimentada por proyectos políticos como el socialismo europeo. En este caso, se presenta un énfasis en los efectos más que en las causas, cuyo funcionamiento se funda en una lógica de articulación de demandas diversas que ya no reconocen un horizonte común, un mundo posible —como lo fue el socialismo para ciertos movimientos políticos en décadas previas— sino muchas luchas *menores*, muchos objetos de lucha, diversos *futuros posibles*.

Por otro lado, en el caso colombiano el fenómeno de la violencia y la demanda de seguridad potencializaron el trabajo de intervención social hacia la década de los ochenta. Fue entonces cuando proliferaron estudios y medicio-

nes¹¹ que revelaron la magnitud y centralidad dada al fenómeno; bajo la relación entre seguridad, población y gobierno se produjo una preocupación por el control social como ejercicio de la “gubernamentalidad”, entendida como:

El conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esta forma tan específica, tan compleja de poder, que tiene como meta principal la población, como forma primordial de saber, la economía política, como instrumento técnico esencial, los dispositivos de seguridad [...] (Foucault, 1999).

La intervención en este campo, fundada privilegiadamente en datos epidemiológicos, se preocupó y preocupa por la clasificación y la valoración de los factores que inciden en la violencia, las formas de prevenirla o encausarla, la reducción del daño y su terapéutica focalizada, que en palabras de José Hleap (2007), revelan los esfuerzos por administrar la violencia “en tanto preocupación por el manejo de la vida de la población o “biopolítica”, forjando la idealidad del buen ciudadano en la trama de principios que aseguran su “convivencia armónica””.

Para el caso particular de Cali, el fenómeno del narcotráfico que tuvo su periodo de incubación en la década del ochenta, se extendió y pasó a

¹¹ José Hleap en: “El buen ciudadano: Conocimiento social y saberes expertos en la convivencia urbana”, documento de trabajo, proyecto “El Conocimiento Social en Convivencia”, Grupo de Educación, Universidad del Valle, 2007., destaca en esta cita el alcance de dichos estudios: Susana Rotker (2000: 8) señala que “Las cifras son abrumadoras: según un estudio del Banco Mundial que cubre 69 países, los latinoamericanos son los más preocupados por el robo y otras formas de crimen. De acuerdo con el estudio, 90% de los empresarios entrevistados experimenta el crimen como un problema realmente serio; 80% confesó que no tiene ninguna confianza en que el Estado protegerá sus propiedades ni su seguridad personal”. Mayra Buvinic (2000 : 37) afirma que: “a pesar de ser parciales, los datos disponibles sugieren que América Latina y el Caribe figuran entre las regiones más violentas del mundo. Allí el promedio de homicidios asciende a 22,9 por cada 1000.000 habitantes, lo cual representa más de dos veces el promedio mundial”. Rodrigo Guerrero (2000 : 27) plantea que: “se estima que en las Américas mueren anualmente cerca de 517.465 personas de manera violenta; aproximadamente 140.000 de esas muertes son por homicidio”. En la medida en que se consolidan sistemas confiables de medición sobre la violencia, observatorios del delito y consolidación de datos sobre muertes, crece la preocupación por la violencia en América Latina que aparece como “un fenómeno inevitable, altamente organizado en algunos casos y eficiente en no pocos” (Carrillo, 2000 : 17); generando un efecto de lupa que dificulta apreciar las relaciones entre los hechos violentos medidos en los indicadores y las demás condiciones de la vida social en la cual se producen.

contribuir y consolidar nuevas formas de violencia y movimiento económico en la ciudad. De esta forma, hacia las últimas décadas del siglo XX, la pobreza dejaría de ser el único problema social considerado en los procesos de intervención y emergió el interés por ciertos sujetos y grupos que no lograron históricamente hacerse a un lugar político, social y cultural. Es así como se establecen intervenciones sociales, no sólo a pobres sino a otro tipo de poblaciones con situaciones sociales diversas.

Para Fantova (2006), la diversificación social de los sectores intervenidos, de los necesitados y de sus necesidades, indica cómo en las sociedades contemporáneas se producen nuevas vulnerabilidades y riesgos imprevisibles. Así, por ejemplo, el incremento en la esperanza de vida permite visibilizar la figura de anciano pero, también, revela la condición de joven y explota las diferencias generacionales. No es gratuito, entonces, que sólo hasta la década del sesenta en el mundo, y en Colombia hacia la década de los ochenta, se inicien programas y procesos de intervención con poblaciones juveniles.

Esta “complejidad de la cuestión social” exige de la intervención un doble juego entre la fragmentación de los problemas sociales y la inclusión de nuevos problemas en las instituciones que hasta el momento se habían dividido la administración de lo social. De esta manera, por ejemplo, los hospitales, encargados históricamente de la atención en salud, debieron hacer frente a los maltratos intrafamiliares, infantiles y a problemas que, como la desnutrición, tienen un origen socioeconómico. Por su parte, el campo de la educación también se diversifica. Las escuelas se vieron enfrentadas a atender también problemas relacionados con las dinámicas juveniles,¹² las violencias urbanas y los problemas familiares de sus estudiantes.

Sin embargo, esta misma complejización social y la emergencia de nuevos problemas desafían los principios de fragmentación y exige en la atención estatal mayor coordinación entre sus acciones. Carballada (2007), entre otros,

¹² En el caso colombiano, los problemas de violencia juvenil se visibilizan hacia la década de los ochenta, con la aparición de los jóvenes sicarios. El asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, a manos de un sicario de 15 años, dispara en el país una serie de trabajos de investigación e intervención que tiene como centro la atención a jóvenes marginados.

insiste en mencionar la crisis de solidaridad de las instituciones estatales como fuente importante para considerar la emergencia de una intervención social compleja. El trabajo interinstitucional, coordinado y articulado por el Estado, se ve afectado por dinámicas que invitan a las instituciones a una disputa por la administración de lo social. Así, “cada institución se considera como productora exhaustiva de los sujetos que necesita en la situación que los necesita” (Lewkowicz, 2004). Desde esta perspectiva, la intervención aparece entonces como un dispositivo que favorece el diálogo interinstitucional pero, también, que incluye en la agenda de las instituciones nuevos problemas y nuevos modos de abordar las cuestiones sociales.